

Más allá de las estadísticas de criminalidad: Por qué necesitamos métricas de seguridad centradas en las personas

Alexandra Abello Colak



Resumen

Este documento destaca los riesgos de depender exclusivamente de estadísticas de criminalidad para medir la seguridad en las ciudades y aboga por la incorporación e institucionalización de métricas centradas en las personas dentro de los enfoques de seguridad existentes. Si bien indicadores tradicionales como las tasas de homicidios y las estadísticas delictivas son muy importantes, basarse exclusivamente en ellos crea puntos ciegos peligrosos, reduce el alcance de las políticas públicas e incentiva respuestas a corto plazo, que a menudo dejan sin abordar las causas más profundas de la inseguridad y el impacto multidimensional y sistémico de las violencias.

Al complementar las estadísticas de criminalidad con indicadores que reflejen las experiencias vividas de inseguridad de las personas, su vulnerabilidad frente a diversos riesgos y su acceso a sistemas de protección, es posible generar evidencia más sólida para diseñar políticas y programas, y realinear los incentivos hacia la prevención, las reformas estructurales y la inversión a largo plazo. Este cambio es esencial para abordar las causas de la violencia y la inseguridad, mejorar la vida de las personas y garantizar que las estrategias de seguridad protejan, en lugar de socavar, sus derechos.

Acerca de la autora

La Dra. Alexandra Abello Colak es investigadora especializada en dinámicas de (in)seguridad humana, violencia y crimen en las ciudades, y enfoques sistémicos para la seguridad urbana. Es fundadora y directora ejecutiva de Security4Peace e investigadora senior de la London School of Economics and Political Science.

Alexandra ha contribuido a debates académicos y de política pública sobre seguridad urbana y ha desarrollado herramientas y metodologías para apoyar estrategias de seguridad y reducción de violencias en varias ciudades. Su experiencia abarca investigación participativa y orientada a la acción en Colombia, México, Jamaica y Sudáfrica, así como asesoría experta a la Red Global de Ciudades más Seguras de ONU-Hábitat y al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana (UNTFHS).

Introducción

Los indicadores que utilizamos para medir la seguridad urbana no son herramientas técnicas neutrales. Estas reflejan cómo definimos el problema de la violencia y la inseguridad en las ciudades, lo que valoramos en las políticas públicas y, de igual importancia, lo que pasamos por alto. Las métricas no solo describen la realidad; también determinan los incentivos para actuar, las prioridades institucionales y las decisiones políticas.

Durante décadas, el éxito en materia de seguridad se ha medido principalmente a través de las fluctuaciones en las tasas de homicidios, las estadísticas de delitos violentos y la capacidad para combatir el crimen organizado. Desde Medellín a Tijuana, desde Ciudad del Cabo a San Salvador, desde Chicago a Glasgow y Londres, las intervenciones se juzgan por la reducción de las formas más visibles de violencia directa, ya sea mediante estrategias punitivas y militarizadas, enfoques preventivos o una combinación de ambos.

Sin duda estos indicadores son cruciales. Las vidas perdidas por la violencia exigen atención urgente. El impacto devastador del crimen en las personas, las familias y las comunidades exige rendición de cuentas, y las políticas públicas deben basarse en la evidencia. Sin embargo, utilizar las estadísticas de delitos violentos como único criterio para medir el éxito de la seguridad es cada vez más problemático.

Basarse únicamente en estos indicadores hace más que ofrecer una imagen incompleta de las inseguridades que experimentan las personas a diario en ciudades y pueblos. También limita el alcance de políticas y crea incentivos para respuestas reactivas y de corto plazo en lugar de soluciones estructurales a largo plazo. En muchos contextos, también ha legitimado enfoques militarizados y autoritarios que socavan los derechos de las personas, debilitan las instituciones democráticas y dejan sin abordar los factores más profundos que generan la inseguridad urbana.

En un momento de creciente militarización, fragilidad democrática y profundización de las

desigualdades urbanas, necesitamos urgentemente adoptar e institucionalizar métricas de seguridad centradas en las personas, especialmente a nivel local. Métricas que capten cómo se experimenta realmente la inseguridad en la vida cotidiana. Métricas que reconozcan la naturaleza multidimensional y sistémica de los riesgos contemporáneos para la vida y la dignidad de las personas. Métricas que creen incentivos y generen evidencia para una inversión sostenida e integral en estrategias que protejan a las personas de forma integral contra dichos riesgos y aborden los factores estructurales de la violencia.

Las métricas no solo describen la realidad. Definen los incentivos para actuar, las prioridades institucionales y las decisiones políticas.

Las limitaciones de las medidas de seguridad actuales

Problema 1: Las estadísticas de criminalidad dejan puntos ciegos respecto a las realidades vividas de inseguridad de las personas

Depender exclusivamente de datos relacionados con delitos violentos es inadecuado no sólo por la “cifra negra” del crimen: delitos que nunca se denuncian debido a la desconfianza en las instituciones, al miedo o la normalización de ciertas formas de violencia, sino también porque no logra captar cómo se experimenta realmente la inseguridad en la vida cotidiana.

En ciudades de América Latina, el Caribe¹ y Sudáfrica² donde hemos llevado a cabo investigaciones participativas y proyectos de colaboración durante los últimos quince años, un patrón ha sido constante: los indicadores de delitos violentos captan la punta visible del iceberg, las manifestaciones más extremas de inseguridad, pero no logran abarcar las formas múltiples y menos visibles de inseguridad que ponen en peligro la vida y la dignidad de las personas, las cuales a menudo persisten incluso cuando la violencia letal disminuye.

Por ejemplo, a pesar de la reducción en las tasas de homicidios, innumerables mujeres y niñas en muchas ciudades siguen viviendo con miedo a abusos, acoso y agresiones, ya sea en casa, camino al trabajo o a la escuela, en la tienda de la esquina o en el transporte público. En algunas comunidades desfavorecidas, este riesgo no solo proviene de familiares, desconocidos o actores criminales, sino también de quienes se espera que brinden "seguridad". Mujeres y niñas en barrios vulnerables de Medellín, Kingston, Tijuana y Durban con las que hemos trabajado, por ejemplo, informaron que si bien reciben con agrado los despliegues policiales y militares para reducir los tiroteos en sus colonias y barrios, al mismo tiempo temen abusos de poder por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, quienes a menudo maltratan a los residentes e incluso manipulan a niñas jóvenes, dejándolas a algunas embarazadas y sin apoyo.

La disminución de la violencia letal tampoco refleja el temor constante que enfrentan los jóvenes a ser discriminados, acosados o sometidos a fuerza excesiva debido a su apariencia o su origen. Tampoco refleja la ansiedad persistente que experimentan sus familias ni el temor de que aún puedan ser explotados e instrumentalizados por grupos criminales para vender drogas, transportar armas, cobrar extorsiones o colaborar en actividades ilícitas, a cambio de dinero y falsas promesas de reconocimiento, protección y respeto que se les niegan en otros ámbitos de la sociedad.

Las estadísticas de homicidios no nos informan sobre la creciente violencia en entornos escolares o digitales, sobre las tensiones y conflictos cotidianos que se intensifican entre vecinos, ni sobre la erosión gradual de la confianza y la cohesión social dentro de las comunidades. No revelan si los miembros de la comunidad LGBTQ+ y otras minorías pueden transitar por la ciudad sin temor a la discriminación o al abuso.

Más fundamentalmente, los indicadores tradicionales de seguridad en los que nos basamos no reconocen que la inseguridad se experimenta de maneras multidimensionales y sistémicas³. Las personas no enfrentan la inseguridad únicamente como consecuencia de

delitos violentos, sino como el resultado de factores económicos, ambientales, institucionales, comunitarios y tecnológicos interconectados y que se refuerzan mutuamente⁴.

En muchos barrios, las personas experimentan inseguridad no solo por la presencia de pandillas o grupos delictivos, sino también porque los efectos acumulativos de la pobreza, la exclusión social, el abandono institucional, la fragilidad de los sistemas de apoyo, la falta de acceso a servicios vitales y arraigadas normas de género, ponen en riesgo sus vidas, sus medios de subsistencia y su dignidad⁵. Estos riesgos interactúan y se agravan con el tiempo, y se experimentan de forma diferente según el género, la edad, la raza, la clase social, la orientación sexual, la situación migratoria y el lugar de residencia.

Estas dinámicas también se reflejan en las ciudades del Norte Global. En Londres, por ejemplo, investigaciones participativas y lideradas por jóvenes muestran que la sensación de inseguridad de los jóvenes se ve condicionada no solo por delitos con arma blanca, sino también por la falta de vivienda digna, el acceso limitado a apoyos, incluidos los servicios de salud mental, así como por el estigma, el perfilamiento racial y la exclusión económica⁶.

Cuando las respuestas de seguridad no logran abordar la inseguridad tal como la experimentan las personas, no sólo fracasan en garantizar la seguridad humana⁷, sino que también erosionan la confianza en las instituciones y dejan muchos de los factores estructurales de la violencia sin abordar.

Los indicadores de delitos violentos captan la punta visible del iceberg, pero no logran abarcar las múltiples formas múltiples y menos visibles de inseguridad que ponen en peligro la vida y la dignidad de las personas.

Problema 2: La forma en que medimos la seguridad socava las soluciones estructurales

Depender excesivamente de las estadísticas de criminalidad crea un problema práctico y político: limita nuestra capacidad de medir, y por tanto priorizar, los factores que realmente previenen la violencia y la inseguridad a largo plazo.

Abordar las causas profundas de la violencia y la inseguridad en las ciudades requiere tiempo e inversión sostenida en intervenciones integradas e intersectoriales⁸ que afronten la compleja red de riesgos que configura la vida de las personas. Esto incluye reducir las desigualdades estructurales; fortalecer el acceso a una vivienda digna y estable; mejorar la infraestructura de los barrios y la calidad de los espacios públicos; ampliar el acceso a servicios de salud mental; crear oportunidades económicas significativas; reconstruir la confianza institucional; reforzar los sistemas de protección; transformar las normas sociales y de género perjudiciales; y fortalecer la capacidad de las comunidades para la resolución de conflictos, el apoyo mutuo y la cohesión social.

Estos esfuerzos son a largo plazo, preventivos y, a menudo, indirectos en su impacto sobre las tasas de criminalidad. Estos también requieren coordinación entre sectores y ciclos políticos. Sin embargo, cuando el éxito institucional se juzga principalmente por la reducción a corto plazo de las estadísticas delictivas, existen pocos incentivos para invertir en este tipo de respuestas.

En muchas ciudades, políticos y funcionarios municipales intentan implementar estrategias más integradas y preventivas. Sin embargo, a menudo carecen de las herramientas y las métricas necesarias para demostrar el impacto de las intervenciones dirigidas a abordar la vulnerabilidad estructural en vez de la reducción inmediata del crimen. Sin indicadores que reflejen mejoras en la seguridad vivida, la dignidad, la estabilidad y la confianza, estas estrategias difícilmente obtienen apoyo político y financiero sostenido.

El mismo desafío afecta a la sociedad civil y a las organizaciones comunitarias. En todas las ciudades, desde Medellín a Londres, las iniciativas

comunitarias juegan un papel crucial en la reducción de la inseguridad multidimensional en la vida de las personas. Apoyan a jóvenes, mujeres y niños que enfrentan diversos riesgos; fortalecen redes sociales de apoyo y protección; brindan espacios seguros; median conflictos; fomentan una ciudadanía activa y crítica; y facilitan acceso a servicios esenciales. Lo que estas organizaciones hacen contribuye a mejorar la seguridad humana, la condición subyacente que previene que riesgos multidimensionales se conviertan en violencia y criminalidad. Sin embargo, gran parte de su trabajo no “habla el lenguaje” de las estadísticas de criminalidad.

Si no medimos las mejoras en seguridad vivida, dignidad, estabilidad, pertenencia, confianza y oportunidades, no podemos demostrar su valor. Como resultado, las intervenciones que abordan las causas de fondo siguen siendo políticamente vulnerables, carecen de financiación suficiente, o son invisibles, incluso cuando se encuentran entre las estrategias más efectivas a largo plazo para la prevención de la violencia.

Sin indicadores que reflejen mejoras en seguridad vivida, dignidad, estabilidad y confianza, las estrategias integrales y preventivas tienen dificultades para asegurar apoyo político y financiero sostenido.

Problema 3: Depender de métricas basadas en criminalidad puede crear incentivos peligrosos

Las métricas basadas en criminalidad no sólo definen los resultados prioritarios de seguridad; también dan forma a los tipos de respuestas que los gobiernos están incentivados a adoptar.

En América Latina, una región profundamente afectada por altos niveles de violencia letal, la dependencia excesiva en los indicadores tradicionales ha reforzado los enfoques de seguridad enmarcados en la lógica de la “guerra”: guerras contra las drogas, guerras contra las

pandillas, guerras contra el crimen. Dentro de este paradigma, el éxito se mide principalmente mediante:

- Reducción de homicidios
- Arrestos y capturas
- Incautaciones de drogas y confiscaciones de armas
- Tasas de encarcelamiento
- El desmantelamiento de organizaciones criminales
- La expansión de la capacidad de hacer cumplir la ley por parte del Estado

Estos indicadores son importantes. El crimen organizado en la región se ha vuelto altamente sofisticado y transnacional. La violencia de las organizaciones criminales ha devastado comunidades, y los Estados tienen la responsabilidad legítima de proteger a sus poblaciones.

Sin embargo, este marco ha limitado lo que se considera como seguridad y ha creado una peligrosa estructura de incentivos donde la inversión fluye naturalmente hacia la aplicación de medidas coercitivas y estrategias de control de corto plazo que a menudo justifican la restricción, en lugar de la protección, de los derechos de las personas.

El éxito de esta visión reducida y tradicional de seguridad se vincula principalmente a la capacidad coercitiva y de combate del Estado, más que a su capacidad para proteger a las personas de los múltiples factores que generan inseguridad en su vida cotidiana. Si bien desmantelar los grupos criminales y reducir su capacidad de ejercer violencia letal es esencial, no es suficiente.

Además, lo que se presenta como éxito en estos paradigmas de "guerra" no siempre se traduce en seguridad vivida. Por ejemplo, arrestos de alto perfil u operaciones letales contra líderes criminales han provocado, en muchos contextos, fragmentación, disputas internas, batallas territoriales y nueva violencia, generando miedo e inestabilidad en las comunidades. Un logro a corto plazo en la lucha contra el crimen organizado puede generar inseguridad humana a largo plazo.

Esta dinámica no se limita a América Latina. En el clima geopolítico actual (marcado por el aumento de tensiones globales, conflictos armados en curso, la expansión de las economías criminales en algunas partes de Europa, el aumento de los presupuestos militares y la renovada competencia entre las grandes potencias) los debates sobre seguridad en América del Norte y Europa también están cambiando hacia nociones más tradicionales de seguridad: la eliminación o contención de amenazas internas o externas mediante armamento, disuasión, control fronterizo y fuerza militar.

Si bien estas preocupaciones responden a una inestabilidad geopolítica real, cuando la seguridad se vuelve sinónimo de capacidad de control y capacidad militar, existe el riesgo de que la seguridad urbana también se reduzca a vigilancia y fuerza, descuidando las condiciones cotidianas que permiten a las personas vivir sin miedo y con dignidad, confianza y estabilidad.

Las métricas de seguridad centradas en el crimen que no se equilibran con medidas de seguridad centradas en las personas pueden normalizar enfoques militarizados y punitivos, marginar las estrategias preventivas y legitimar respuestas que socavan la gobernanza democrática y los derechos humanos en nombre de la "seguridad".

Si bien desmantelar los grupos criminales y reducir su capacidad de ejercer una violencia letal es esencial, no es suficiente.

Hacia métricas de seguridad centradas en las personas

Dadas las limitaciones de las métricas centradas en delitos, la pregunta clave es: ¿Cómo podemos medir la seguridad de maneras que proporcionen una comprensión más profunda del problema y equipen a los responsables de las políticas con herramientas para actuar de manera efectiva?

Replantear la seguridad desde de una perspectiva centrada en las personas cambia el enfoque del control del crimen a la protección de las personas frente a la compleja red de factores que amenazan sus vidas, sus derechos, y dignidad. En este marco, el objetivo central de la política de seguridad no es solo reducir la violencia o reprimir la actividad delictiva, sino fortalecer las condiciones que permiten a las personas vivir de forma segura y plena, y ejercer sus derechos, así como abordar factores estructurales que impulsan diversas formas de violencia, tanto visibles como menos visibles.

Replantear la seguridad desde una perspectiva centrada en las personas cambia en enfoque del control del crimen a la protección de las personas de la compleja red de factores que amenazan sus vidas, sus derechos y su dignidad.

Desde una perspectiva centrada en las personas, las preguntas orientadoras que informan el desarrollo de indicadores y la evaluación del desempeño de las políticas cambian a:

- ¿Cómo se puede proteger integralmente a las personas de las múltiples inseguridades que configuran sus vidas?
- ¿Cómo se pueden garantizar condiciones de vida dignas que reduzcan la vulnerabilidad a la violencia y permitan a las personas ejercer sus derechos?
- ¿Qué tipos de relaciones y capacidades institucionales fomentan la confianza, la rendición de cuentas y la prevención integral?
- ¿Cómo se pueden mejorar las condiciones socioeconómicas urbanas y comunitarias para que la violencia y la criminalidad no se arraiguen ni se reproduzcan?

En este enfoque, la seguridad no se define únicamente como la ausencia de crimen, sino como la presencia de condiciones protectoras (sociales, económicas, institucionales, ambientales, tecnológicas y relacionales) que permiten a las personas vivir sin miedo, con

autonomía y libertad. Por consiguiente, las métricas de seguridad centradas en las personas buscan captar, entre otras:

- Diferencias en las experiencias de seguridad entre grupos poblacionales en función de la edad, el género, la etnia, el nivel socioeconómico, el lugar de residencia y otros factores.
- Exposición a formas no letales de violencia y coerción en diversos espacios de socialización, como el hogar, la escuela, el trabajo, los espacios públicos y digitales.
- La capacidad de las instituciones para proteger a las personas de amenazas que van más allá de la violencia letal y los delitos contra la propiedad.
- Confianza institucional y experiencias de los ciudadanos con las autoridades y otros servicios esenciales.
- Estabilidad económica y vulnerabilidad de la población a explotación por parte de grupos ligados a economías ilegales.
- Acceso a vivienda, servicios de salud, apoyo de salud mental y espacios urbanos que posibiliten una vida digna y redes de apoyo.
- Experiencias de discriminación y exclusión social.
- Cohesión comunitaria y capacidad para la resolución pacífica de conflictos.
- La capacidad de moverse libremente sin miedo.
- La capacidad de imaginar y planificar el futuro.

Las métricas centradas en las personas reconocen que la seguridad es multidimensional y sistémica. Permiten a responsables de las políticas públicas identificar cómo y por qué diferentes grupos experimentan inseguridad, lo cual es esencial para establecer prioridades políticas efectivas. También arrojan luz sobre factores estructurales que las estadísticas delictivas convencionales suelen ocultar.

El desafío de captar experiencias a nivel local

Un desafío clave para medir la seguridad desde una perspectiva centrada en las personas es que la inseguridad se experimenta localmente. Los problemas globales o nacionales se manifiestan

de manera diferente en barrios, comunidades y hogares específicos. Por lo tanto, para medir la seguridad se requieren datos sublocales que capturen cómo las personas experimentan amenazas en sus vidas cotidianas. Sin embargo, en muchos contextos, los datos a nivel local son escasos y las capacidades institucionales para generarlos son limitadas, lo que hace que la medición a esta escala sea particularmente difícil.

A pesar de estas limitaciones, están surgiendo esfuerzos importantes en diferentes regiones del mundo para promover enfoques contextualizados más amplios para la medición de la seguridad local que vayan más allá del delito:

- En Japón, se han desarrollado indicadores de seguridad humana alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel municipal, incorporando la dignidad como una dimensión central de la gobernanza local⁹.
- En Canadá, iniciativas como el Kit de herramientas de evaluación y monitoreo de la seguridad comunitaria y urbana¹⁰ apoyan a ciudades en el monitoreo de la seguridad y el bienestar de la comunidad.
- A nivel global, el Monitor de Seguridad Urbana¹¹ de ONU-Hábitat promueve indicadores que incorporan la gobernanza y capacidades institucionales en diversas áreas.
- El Índice Glocal de Seguridad Humana¹² permite a ciudades y comunidades en cualquier región monitorear las condiciones de seguridad con base en la experiencia vivida de las personas y sus derechos. Este índice mide los niveles de vulnerabilidad de la población frente a diversos riesgos y el acceso que tienen a sistemas de protección en nueve dimensiones claves.

En conjunto, estas iniciativas reflejan un reconocimiento creciente de que medir la seguridad de manera efectiva requiere nuevas herramientas contextualizadas, multidimensionales y fundamentadas en las realidades locales.

Conclusión: Recuperando la seguridad

La seguridad se ha reducido durante mucho tiempo a la gestión de la violencia más visible, cuando debería significar la protección efectiva de la vida, los derechos, la dignidad y el futuro de las personas. En una era marcada por la militarización, la fragilidad democrática y el aumento de las desigualdades, reducir la seguridad al control del crimen genera el riesgo de reforzar las mismas dinámicas que generan inseguridad.

Complementar las métricas de criminalidad con métricas centradas en las personas permite entender la seguridad no sólo como la reducción de las formas visibles de violencia o la supresión de la actividad delictiva, sino como la provisión de la protección que las personas necesitan para vivir vidas plenas, conectadas y dignas. Los Estados tienen la responsabilidad de reducir la violencia y hacer cumplir la ley. Pero también deben garantizar la seguridad de las personas en su vida cotidiana.

Si realmente queremos prevenir la violencia, fortalecer la democracia y proteger a las comunidades, debemos institucionalizar métricas que reflejen cómo se experimenta realmente la inseguridad e incentivar soluciones estructurales y de largo plazo.

Ampliar lo que medimos amplía lo que se vuelve políticamente posible. Cuando el éxito institucional se define no sólo por la reducción de la violencia letal, los arrestos y las incautaciones, sino también por las mejoras en la seguridad vivida, es más probable que los gobiernos inviertan en prevención, reformas estructurales, infraestructura social y cambios institucionales a largo plazo.

Notas y Referencias

1. See: Humanising Security through Action-oriented Research in Latin America by Pearce & Abello Colak (2021); Vínculos: espacios seguros para mujeres y jóvenes en América Latina y el Caribe. Eds. Angarita Cañas, Carolina Sánchez Henao (2019); Seguridad Humana y Violencia Crónica en México: Nuevas Lecturas y Propuestas desde Abajo Eds. Kloppe-Santamaria & Abello Colak (2019)
2. See: Making Cities and Human Settlements Safer after COVID-19 (UNTFHS); Addressing Urban Violence through Participatory Research with Youth in Colombia and South Africa
3. Mapping Systems of Human (In)security To Understand the COVID-19 Pandemic's Enduring Impact on Urban Violence by Abello Colak (2023)
4. Special Report on Human Security by UNDP (2022)
5. Why Addressing Human Insecurity is the Key to Safer Cities by Abello Colak, A. (2025)
6. Understanding Young People's Experiences of Violence in Lambeth by LPAC
7. UN General Assembly Resolution 66/290, adopted in 2012
8. United Nations System-wide Guidelines on Safer Cities and Human Settlements by UN-Habitat (2020)
9. SDGs and Local Communities: How to Create Human Security Indicators in Your Town! By Yukio Takasu and Japan International Cooperation Agency (JICA)
10. Community & Urban Safety Monitoring and Evaluation Toolkit. Canadian Centre for Safer Communities
11. Urban Safety Monitor. UN Habitat, EFUS, and FIXED
12. Glocal Human Security Index. Developed by Security 4 Peace



Security 4 Peace es una organización independiente de pensamiento y acción sin ánimo de lucro que trabaja para ayudar a construir sociedades más seguras, justas y pacíficas a través de innovación basada en datos, investigación participativa y acción colaborativa.